

¿Urbanismo social o seguridad democrática en las ciudades?

Estrategias gubernamentales en conflicto

Por:

Peter Brand, Escuela de Planeación Urbano-Regional, Facultad de Arquitectura, Sede Medellín.

Furor e indignación provocó la propuesta del presidente Uribe de contratar estudiantes de colegios como informantes a sueldo en su guerra contra el crimen organizado, ahora en las Comunas de Medellín. Retrocediendo ante la reacción pública y el exabrupto de poner menores de edad en la línea de fuego sucio, el debate pasó a las universidades donde también fue rotundamente rechazada. Felizmente, entre los primeros en hacerlo fue el rector de la Universidad Nacional de Colombia.

Más allá del escándalo inmediato, la propuesta del gobierno central pone en evidencia dos concepciones del problema del orden público en las ciudades, y dos estrategias radicalmente distintas para enfrentarlo: la de la seguridad democrática del gobierno de Uribe, frente a lo que podríamos denominar, genéricamente, el urbanismo social de las administraciones locales.

El problema de la violencia urbana ha venido creciendo en todo el país recientemente. Para el año pasado, en Medellín los homicidios se incrementaron en 133%, en Cali 38% y en Bogotá 29% (El Espectador, 2009). En el caso de Medellín, tradicionalmente la más violenta, luego de un tope de 381 homicidios/100.000 habitantes en 1991, la tasa descendió a su nivel más bajo de 34/100.000 habitantes en 2007 (Alcaldía de Medellín, 2007), para luego repuntar en 2008 y 2009 (llegando a alrededor de 60 homicidios/100.000 habitantes). También se ha presentado una mayor concentración socioespacial de la violencia: en 2002 hubo homicidios en 94% de los barrios de Medellín, una cifra que se redujo a 46% en 2007 (Medellín Cómo Vamos, 2008). En efecto, la violencia urbana tiende a concentrarse en los sectores más pobres y marginados de la ciudad, y fue precisamente ahí donde se inició con fuerza el urbanismo social.

Por su parte, la propuesta más reciente del presidente Uribe es consistente con su estrategia militar en todo asunto territorial: ofensiva armada, ocupación por parte de las fuerzas del Estado, inteligencia proveniente de sistemas de alta tecnología y redes de informantes, retribución económica (recompensas y sueldos fijos). Luego viene un período de suspenso, de calma chicha, y más tarde la reaparición de fuerzas oscuras con el reciclaje del paramilitarismo y el narcotráfico fortalecido. En esto está enredado el país en estos momentos, sin salidas claras.

Las ciudades tienden a elaborar una perspectiva distinta. Para el gobierno central es un asunto ideológico y dogmático (“seguridad democrática”), de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal, que a su vez justifica el uso extensivo de la violencia oficial y los abusos de los derechos humanos. Para las administraciones locales, sin embargo, es un asunto mucho más matizado: una dimensión real y humana en el transcurrir de la vida cotidiana. En la complejidad urbana, no caben los artificios simplistas; no se pueden bombardear las ciudades. La influencia de órdenes de control extra-estatales (pandillas, combos y bandas, pero también organizaciones más ‘oficiales’)

en los sectores populares envuelve la ciudadanía en general, especialmente en el contexto de las múltiples informalidades/ilegalidades que caracterizan la vida en las periferias urbanas. El bien y el mal se entremezclan y se confunden en las luchas cotidianas de supervivencia, de tal manera que los sectores populares de la ciudad son un Vietnam para la represión armada. Pregúnteselo a Río de Janeiro.

Es por esto que las políticas de seguridad en las ciudades tienen, obligatoriamente, un componente igualmente importante de convivencia. No es posible sostener dicho vacío en el corazón de la política de seguridad del gobierno central en el caso de las ciudades. Esto lo entienden muy bien la iglesia, la izquierda democrática y lo que queda de la gran tradición humanista colombiana. Y lo han entendido muy bien las administraciones urbanas más ilustradas. Cada uno a su manera, los ex alcaldes Mockus, Peñalosa y Fajardo fijaron nuevas pautas para garantizar niveles mínimos de convivencia en las conflictivas ciudades del país. Las ideas alrededor de la cultura ciudadana, el espacio público y lo que ahora se llama el “urbanismo social” en Medellín, han sido retomadas, de alguna manera u otra, por la mayoría de las ciudades. Es una política urbana nacional sin orígenes en ningún Ministerio o Planeación Nacional, sino construida desde abajo, desde la realidad urbana.

El urbanismo social de Medellín es el esfuerzo más reciente en este sentido. Consiste en invertir en los sectores populares, en pagar la “deuda histórica” que tiene la sociedad con estos sectores olvidados y urbanísticamente ignorados de la ciudad. Pero lo hace de una manera particular. No se pretenden solucionar los problemas de fondo relacionados con la vivienda, el empleo y la pobreza. Al construir Metrocables, parques-biblioteca, colegios de alta calidad (arquitectónica), espacios públicos, etc. - proyectos puntuales bien logrados y con un alto impacto tanto estético como social – se pretende no sólo “hacer la mejor arquitectura, la que suscita el orgullo y la autoestima de la comunidad, una arquitectura que genere sentido de pertenencia”, sino también ejecutar proyectos palanca que “lideran una transformación social profunda” (Alcaldía de Medellín, 2008). Se espera construir, literalmente, un nuevo “contrato social” mediante la dotación de espacios de ciudadanía, escenarios de democracia y convivencia.

Igual a los proyectos de Mockus y Peñalosa en Bogotá, también en Medellín se trata de una manipulación de símbolos. Mockus jugó con símbolos inventados y puestos en escena en el espacio público, sobre el respeto al otro y a ciertas reglas de juego básicas; Peñalosa se dirigió más directamente al espacio público mismo, y Fajardo explota el poder simbólico de la arquitectura. En todos los casos se trata de crear sensaciones de inclusión social y de disfrute ‘igual’ de la ciudad, del ejercicio de la ciudadanía si no plena, por lo menos decente.

No hay que desestimar la importancia de lo simbólico, el espacio público y la potencia de la arquitectura bien realizada y utilizada, pero eso solo no hace milagros. De hecho Mockus terminó su segundo período abogando por códigos penales más estrictos, y Peñalosa cayó en la petulancia. En Medellín, el alcalde Alonso Salazar, muy curtido en asuntos de la violencia, ha reclamado más policías y más operatividad del sistema judicial, y de hecho su estrategia de seguridad y

convivencia incluye el emplazamiento en los sectores populares de más estaciones de policía y CAIs periféricos.

Aún así, las sutilezas de las estrategias urbanísticas contrastan fuertemente con las opresivas propuestas del gobierno central. Ya se habían ensayado redadas amplias y tomas militares de gran escala (Operación Orión, en la Comuna 13), y ahora se proponen tomas cuadra por cuadra, apoyadas desde el aire por helicópteros incluso en operaciones nocturnas. Prácticas derivadas de la doctrina “anti-terrorista”, ¿es este el tipo de acontecer diario en los barrios populares que promoverá la paz y la convivencia?

Se observa, además, que el tema del orden y la convivencia pone en evidencia la crisis general de la política urbana del gobierno central: su ineficacia, parcialidad y torpeza. Como en todas las actuaciones del gobierno central, también en lo urbano todo se hace a la brava, sin consulta, por imposición: ‘transmilenios’, macro-proyectos nacionales de vivienda de interés social, y ahora la seguridad democrática. No se dan cuenta, ni en el gobierno ni en las menguadas y aisladas tecnocracias nacionales, que hay mucho que aprender de las más pacientes y democráticas labores de las administraciones locales.

Referencias:

Alcaldía de Medellín (2008) *Medellín: la transformación de una ciudad*, Medellín.

Alcaldía de Medellín (2007) *Medellín en cifras*, Medellín. (www.medellin.gov.co/alcaldia)

Medellín Cómo Vamos (2008) *Informe de Indicadores Objetivos – Seguridad 2008*, (www.medellincomovamos.org)

El Espectador (2009) *Violencia urbana – un reto en 2010*, (editorial), 30 diciembre.